

Hacia un esbozo de las oligarquías en el Caribe hispanoparlante

MANUEL MALDONADO-DENIS

El Caribe ha sido designado, justicieramente, como “el Mediterráneo norteamericano”. Del dato radical que, a manera de tozudo hecho sociológico, se nos perfila con toda claridad como consecuencia de la sentencia antes mencionada, podemos derivar una serie de observaciones que nos situarán en la pista del carácter fundamental de las “oligarquías” dentro del Caribe hispanoparlante. Forzoso es, en dicho contexto, excluir a Cuba, ya que ésta —como país socialista— no se halla en la posición de subordinación colonial a los Estados Unidos, o neocolonial que caracteriza a sus dos Antillas hermanas: Puerto Rico y la República Dominicana. Quiero decir con ello que las sociedades dominicanas y portorriqueñas funcionan dentro del marco de una determinada situación de subordinación económica y política vis-a-vis los Estados Unidos. Por ende, las condiciones de existencia de sus oligarquías criollas, sus estilos de vida, sus criterios para la determinación del *status* social de sus componentes, sus ideologías políticas, estarán determinadas, en gran medida, por las condiciones dadas operantes en un sistema económico-social que les sirve como trasfondo. Dicho sistema económico-social funciona internacionalmente como una vasta red cuyas ramificaciones envuelven a sus “clientes” en un vasto aparato controlado por un puñado de corporaciones gigantescas que operan monopolísticamente y que se entrelazan con el capital financiero internacional para formar un complejo que los pone fuera del alcance del control de los países “subdesarrollados”.¹ Vale decir, que la posibilidad del surgimiento de una auténtica burguesía nacional que posea el control de los principales medios de producción del país —en este caso Santo Domingo o Puerto Rico— no dependerá exclusivamente de los esfuerzos que pueda ser capaz de realizar dicha clase en cuanto clase, sino que dicho surgimiento dependerá, esencialmente, de las fuerzas económico-sociales más

amplias que controlan el mercado mundial y los precios de las materias y productos elaborados o semielaborados que producen nuestros países subordinados. En todo caso las oligarquías criollas —bajo el sistema económico-social que acabo de describir asaz someramente— son en realidad oligarquías dependientes, supeditadas, aunque no por ello —en la mayoría de los casos— menos aliadas de las oligarquías que dictan las condiciones desde los grandes centros financieros e industriales de las metrópolis capitalistas. Escamotear estos hechos sería el equivalente de pretender escamotear el famoso dictamen de Marx en el sentido de que los hombres hacen la historia dentro de ciertas y determinadas condiciones que les son dadas. Las oligarquías dominicano-portorriqueñas podrán pensar, si así lo desean, que ellas determinan el curso de sus acciones, pero esa apreciación subjetiva sólo sirve para puntualizar cuán hábil pueden ser las oligarquías metropolitanas al hacerlas copartícipes de un pequeño trozo del gran pastel que ellos tan golosamente devoran.

Sirva esto a manera de introducción al tema general que nos preocupa. Tomaremos primero que nada a la oligarquía portorriqueña (la cual conozco mejor) y luego intentaremos hacer lo propio con la dominicana.

I

Puerto Rico es una sociedad colonial de tipo clásico, supeditada política, económica y militarmente a los Estados Unidos desde el 1898. Como toda sociedad colonial, Puerto Rico, según la acertada frase del profesor Gordon K. Lewis, “produce lo que no consume y consume lo que no produce”.² A fines del siglo pasado —aun bajo la dominación española —el estudio de Harvey S. Perloff indica que Puerto Rico era principalmente un productor de café, tabaco y azúcar. Con la ocupación norteamericana se intensificó el cultivo de la caña de azúcar por parte de un grupo de corporaciones norteamericanas; el café, el tabaco y los frutos menores se convirtieron en reductos de la aristocracia criolla aferrada a su estilo de vida tradicional, alejada de las nuevas tendencias introducidas por los norteamericanos. Las primeras cuatro décadas de este siglo marcaron la ascendencia y el apogeo del “Rey Azúcar” y el declinar —ya prácticamente consumado en el día de hoy— de la oligarquía criolla dependiente del café, el tabaco y los frutos menores como determinantes de sus oportunidades de vida.³

Con el advenimiento de un nuevo gobierno al poder en 1940 (bajo la égida del Partido Popular Democrático dirigido por Luis Muñoz Marín) el énfasis relativo a la economía cambió. A partir de 1947 se inaugura la “Operación Manos a la Obra”, que mediante el sistema de exención contributiva para las firmas extranjeras que se establecieron

en Puerto Rico, conjuntamente con el señuelo de los salarios bajos y la mano de obra abundante, convirtió la “industrialización por invitación” en el estímulo mayor para la exportación de capital —sobre todo norteamericano— hacia Puerto Rico. De esta manera el balance se ha ido alterando de forma tal que el setenta y ocho por ciento de las firmas establecidas en Puerto Rico están controladas por capital norteamericano. Lo mismo puede decirse de las principales fuentes de capital financiero, de las grandes cadenas de supermercados, de las principales compañías de seguros, de las grandes tiendas de departamentos. Los cafecultores y tabacaleros que restan, así como los productores de azúcar criollos, se hallaron pasando por una gran crisis que los sitúa en una posición de desasosiego ante las perspectivas que les reserva el futuro.

Como consecuencia de la creación de este “capitalismo de invernadero” la oligarquía tradicional portorriqueña —clase ociosa, en el sentido de Veblen, cuyos medios de existencia estaban determinados primordialmente por su explotación de la caña, del café, el tabaco o los frutos menores, cuyo estilo de vida era esencialmente el de una clase patricia y refinada—, * ha tenido que entrar —bajo riesgo de extinción— en el toma y daca de los *nouveau riches* del mundo de las finanzas y de la nueva industria. No habiendo así una base autóctona que sirva como soporte para el surgimiento de una oligarquía criolla cuyos intereses se hallen en contradicción con los de la oligarquía metropolitana, y dado el caso de que este proceso de absorción económica va en incremento, no es de extrañarse que la economía portorriqueña sea cada día más —y mediante un proceso acelerado— una economía de consumidores. Las consecuencias socio-económicas de este hecho no pueden pasarse por alto. Puerto Rico es hoy por hoy el mayor consumidor de productos norteamericanos en toda la América Latina; ¡más aún que países del tamaño de Brasil y Venezuela! Puerto Rico se ha convertido en un gigantesco mercado de los Estados Unidos.

Gradualmente la oligarquía portorriqueña se ha ido convirtiendo en una oligarquía importadora, intermediaria de los grandes intereses provenientes de la metrópoli. Sus intereses económicos están así estrechamente vinculados a los intereses económicos de ésta. Su estilo de vida es casi un calco del estilo de vida de sus homónimos en los Estados Unidos. Ideológicamente su identificación con los símbolos de “la sociedad opulenta” los ubica en el sector político que defiende el *statu quo* o que aboga por la anexión a los Estados Unidos como Estado de la unión norteamericana.

Para el joven ejecutivo portorriqueño que trabaja en una corporación norteamericana las oportunidades de existencia están determinadas por el éxito de la entidad para la cual trabaja. Y aunque las posiciones clave

estén siempre ocupadas por norteamericanos, su tajada es lo suficientemente generosa como para que no tenga por qué quejarse.

Contra la retórica oficial al respecto, todo este cambio que se ha operado en Puerto Rico y que ha culminado con un nuevo tipo de dependencia económica —esta vez de tipo industrial más bien que de tipo agrícola— no ha traído como consecuencia una disminución en el filo marcadamente clasista que ha sido característico de la composición de la oligarquía portorriqueña desde su formación definitiva en el siglo pasado. Este hecho puede captarse con claridad si analizamos el carácter cerrado de las “familias prominentes” de la ciudad sureña de Ponce, cuna de la más rancia aristocracia criolla. El azúcar, el ron y el cemento proveen a un grupo de familias que no excede de diez un enorme poder económico y político en todo el litoral sur, poder que se extiende hasta el nivel nacional en más de una forma. Estas familias generalmente propician matrimonios entre sus hijos, tienen sitios exclusivos de reunión y de veraneo y se hallan muy identificadas en sus ideologías políticas. Aunque el círculo no es hermético, el que aspire a entrar en él debe traer como credencial no sólo una considerable fortuna, sino también un apellido “de algún peso”. Los hijos de estas familias por lo general asisten a colegios privados fuera de Puerto Rico —preferiblemente norteamericanos— y son imbuidos desde una temprana edad de su lugar privilegiado dentro de la sociedad portorriqueña. Como la mayoría de las empresas portorriqueñas que funcionan en ese litoral dignas de mencionarse son “firmas familiares”, la empresa respectiva es de suyo una proyección económica del patrimonio familiar. Ser rico y pertenecer a una “familia prominente” del sur de la isla es entonces no sólo un distintivo de clase sino de *status* y de poder.

Esta división clasista se refuerza con el hecho de que las oportunidades de movilidad social por medio de la educación se hallan limitadas a un pequeño por ciento de la población total portorriqueña. Un estudio reciente demuestra que 47.3% de la fuerza de trabajo de Puerto Rico tiene una educación inferior al sexto grado de escuela elemental, y el 62.4% una educación inferior al noveno grado de escuela elemental. Sólo el 15% de los adultos tienen una educación de escuela superior.⁵ Y, según el estudio realizado por el doctor Luis Nieves-Falcón, sólo el 1% de la fuerza de trabajo en Puerto Rico puede llegar al nivel universitario. Hablo aquí de las universidades estatales como la Universidad de Puerto Rico, no de universidades privadas o extranjeras. Generalmente las “familias prominentes” envían a sus hijos a universidades norteamericanas. Al regreso éstos se incorporan a las “firmas familiares” o a las grandes y prestigiosas firmas legales que operan en San Juan y Ponce. Para usar el término de Pareto, hay muy poca “circu-

lación de las élites” en Puerto Rico. Porque si bien es cierto que la política y las profesiones liberales ofrecen vías de acceso a *status* y poder, el poder económico —que es el fundamental— sigue siempre en manos de una minoría de familias criollas que a su vez dependen, en última instancia, de la élite del poder que controla el “complejo militar-industrial” en los Estados Unidos.⁶

El programa económico del gobierno actual ha logrado —mediante el crecimiento elefantiásico del sector industrial a expensas del agrícola— socavar casi toda fuente de poder económico autónomo en manos portorriqueñas y convertir al país en un apéndice de la economía norteamericana. Con los medios de producción en manos de una cada vez más pequeña minoría criolla y de las grandes corporaciones monopolísticas norteamericanas, se ha acentuado cada vez más el proceso de disolución de una oligarquía portorriqueña, de una oligarquía nacional. Reducido al nivel de intermediario, el rico portorriqueño —salvo raras excepciones— termina por identificarse plenamente con los que dictan los términos desde Nueva York o Washington. Su anuncio es a menudo el resultado de su propia impotencia. El oligarca criollo comprende muy pronto que su supervivencia depende del más poderoso en la asociación. La sumisión como un *fact of life* es la secuela inevitable de un sistema predicado sobre la total indefensión del “socio” más débil de la relación.

II

La República Dominicana es, como Puerto Rico, un país dentro de la “esfera de influencia” de los Estados Unidos. En el momento que escribo (agosto, 1966) todavía dicho país se halla intervenido por las tropas norteamericanas enviadas por el presidente Johnson a raíz de la insurrección popular del 24 de abril de 1965. La oligarquía dominicana, aliada tradicional de la dictadura de Trujillo, respaldó con ahínco la intervención norteamericana y el bando de los militares anti-constitucionalistas, identificando de esta manera la supervivencia de sus propios intereses con la presencia permanente del poderío militar y económico norteamericano en el área del Caribe.

La oligarquía dominicana —lo contrario de lo que pasa con la portorriqueña— es esencialmente de tipo latifundista y comercial. Siendo la República Dominicana un país predominantemente agrario, los grandes terratenientes forman un sector oligárquico poseedor de un gran poderío económico y social. Lo mismo puede decirse de los grandes comerciantes que controlan el comercio exterior en la economía dominicana. Vale la pena citar algunos datos estadísticos ofrecidos por la Oficina

Nacional de Planificación (“Bases para el Desarrollo Nacional”), reproducido en la edición del periódico *La Voz del Pueblo*, correspondiente al 17 de abril de 1966.

Veamos. Según este estudio, menos del 0.1% de la población agrícola activa acapara el 35% de las tierras cultivadas. En cambio, el 70% de la población agrícola activa (unos 585 000 moradores del campo) carece en absoluto de propiedad sobre la tierra. En este contexto el latifundio es una realidad económico-social innegable. El censo agropecuario de 1960 registró 447 000 fincas. De este total, el 85% de fincas dispone sólo del 20% del total de tierras, mientras que el 0.004% de las fincas acapara el 30% de las tierras. Es decir, que 207 latifundistas tienen 1.3 veces más tierra que 382 400 pequeños agricultores. Debido principalmente al sistema latifundista permanece inactivo el 30% de la tierra agrícola. Sobreviven en el campo dominicano —según el informe citado— prácticas tales como el pago en especie y el pago en trabajo (colonato). Según la exposición de los datos expuesta por el doctor Marcio Mejía-Ricart, director de *La Voz del Pueblo*, el resultado de todo ello es el siguiente:

El latifundismo hunde todo el campo en la miseria. El 70% de la población agrícola activa carente de tierra significa lo siguiente, según el censo de 1960: 197 000 pequeños arrendatarios bajo el yugo de la aparcería y el colonato; unos 140 000 forzados a trabajar como braceros por un jornal de hambre; y 250 000 desempleados que sólo hallan empleo en las zafras estacionales del azúcar, el café, el arroz, etcétera. Cada año llegan a la edad de trabajar 37 000 campesinos, pero la atrasada economía agraria latifundista de nuestro país produce fuentes de trabajo a un ritmo muchísimo menor que el crecimiento de la demanda de empleo. Por eso, una gran parte de esos 37 mil campesinos pasa cada año a engrosar las filas de los sin trabajo.

Los grandes latifundistas y la clase alta urbana que reside en la capital forman un núcleo de “familias prominentes” que han logrado ejercer un control efectivo sobre la economía y la política dominicana a través de su historia. De ahí su irreductible oposición al régimen constitucional de Juan Bosch y a la revolución del 24 de abril. El acusado carácter clasista que Bosch dio a su campaña presidencial sin duda alarmó a la oligarquía dominicana, contribuyendo de esta manera a su alianza con las Fuerzas Armadas dominicanas, de una parte, y con el gobierno norteamericano de la otra. De hecho, la oligarquía dominicana comprende que la única fuerza capaz de poner un muro de contención efectivo a la revolución social en el país es la gran potencia del norte. Por eso al poner en la balanza sus propios intereses y los intereses nacionales dominicanos se inclinan en favor de

aquéllos en menoscabo de éstos. Al igual que la oligarquía portorriqueña —cuyas oportunidades de existencia, según he intentado demostrar, tienen un origen distinto al de la oligarquía dominicana— la dominicana es eminentemente conservadora en su ideología política. A través de la accidentada trayectoria de la política dominicana han respaldado, en diversas ocasiones, a Trujillo, a la Unión Cívica Nacional dirigida por Viriato Fiallo, al “gobierno de reconstrucción nacional” de Imbert Barreras y al gobierno recientemente electo del doctor Joaquín Balaguer.

El estilo de vida de la oligarquía dominicana no difiere fundamentalmente del estilo de vida de la portorriqueña. En ambos casos el punto básico de referencia para sus componentes lo es Europa o los Estados Unidos. Sus hijos con frecuencia estudian en universidades extranjeras y viajan por el exterior. Como toda clase latifundista, la oligarquía dominicana conserva muchos de los patrones de conducta característicos de una sociedad precapitalista: en su actitud frente al trabajo, en sus relaciones familiares, en su trato con los peones o aparceros que dependen de ellos. Al contrario de la oligarquía portorriqueña actual, la oligarquía dominicana no parece haber adoptado lo suficiente la “ética capitalista”. De ahí que el espíritu innovador, que apareja la toma de riesgo, en suma, la actitud típica del empresario capitalista, no haya calado hondo en una oligarquía que aún vive la vida ociosa del gran terrateniente que predominaba en Puerto Rico hace tres décadas. La actitud patriarcal, autoritaria, paternalista, caracteriza aún las relaciones entre el gran terrateniente dominicano y sus empleados dependientes. El ritmo mismo de la vida portorriqueña. La actitud de que “el tiempo es dinero” prevalece en un grado mucho menor en la República Dominicana que en Puerto Rico, con todas las consecuencias económicas que se derivan de dicha actitud. Para usar un término un poco trillado, creo que podríamos afirmar que, al menos en lo que respecta a su capacidad para hacer la economía más productiva, desde el punto de vista capitalista, la oligarquía portorriqueña es más “progresista” que la dominicana. Esto en cuanto a la tendencia de ésta hacia la racionalización de la actividad económica, reducción de costos, propensión hacia la innovación tecnológica, etcétera. En cuanto a las perspectivas ideológicas, ambas oligarquías coinciden en sus aspectos más fundamentales: defensa de la libre empresa; hostilidad manifiesta hacia los grupos nacionalistas o “izquierdistas”; apoyo a los Estados Unidos y a su política internacional; irreductible oposición a Cuba.

III

Este breve esquema o esbozo que he pretendido ofrecer en estas páginas no deja de ser un primer intento de definir sociológicamente las características salientes de las oligarquías en Puerto Rico y la República Dominicana. Todavía hay muchas lagunas en el análisis de estos grupos que sería menester aclarar mediante el estudio empírico. Así, por ejemplo, ¿cuán cerradas son estas élites? ¿Hasta qué punto el poder político que éstas poseen puede ser contrarrestado o neutralizado por otros grupos dentro de las sociedades respectivas? ¿Qué vinculación real existe entre estas élites y los altos círculos financieros e industriales en los Estados Unidos? Mucha de esta información permanece aún como un arcano que aguarda una más acuciosa investigación. A pesar de ello, creo que toda investigación que pretenda ir a la raíz del problema planteado no puede hacer abstracción del hecho de que las oligarquías que operan en el Caribe funcionan en un contexto restrictivo que les impone condiciones concretas de existencia: el contexto del capitalismo en su fase superior monopolística y financiera tal y como éste opera en el campo internacional.

“La verdad es el todo”, decía Hegel. Partiendo de esa base, el todo es el sistema capitalista mundial en su fase imperialista. Pretender entender la conducta y las actitudes de esa parte del sistema que componen las oligarquías del Caribe hispanoparlante nos condenaría a todos, indefectiblemente, a un análisis vacío y estéril, destinado a resbalar por encima de los datos realmente significativos que se nos presentan como hechos sociológicos de primera magnitud.

¹ Véase al respecto a P. Baran y P. Sweezy: *Monopoly Capital* (New York, Monthly Review Press, 1965); Kwame Nkrumah: *Neo-Colonialism, the Higher Stage of Imperialism* (New York, International Publishers, 1965).

² Gordon K. Lewis: *Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean* (New York, Monthly Review Press, 1963).

³ Harvey S. Perloff: *Puerto Rico's Economic Future* (University of Chicago Press, 1947); Bailey y Justine Diffie: *Porto Rico: a Broken Pledge* (New York; The Vanguard Press, 1931)

⁴ Véase al respecto el interesante artículo “The prominent families of Puerto Rico”, escrito por Raymond Scheele y que aparece en el libro de Julian Steward (compilador) *The People of Puerto Rico* (University of Illinois Press, 1956), pp. 418-462.

⁵ Véase William H. Knowles “Manpower and Education in Puerto Rico”, *The San Juan Review*, junio, 1966, p. 24.

⁶ Uso aquí deliberadamente el término utilizado por el presidente Eisenhower en su discurso de despedida. Uso “élite del poder” en el mismo sentido en que lo utiliza Mills en su libro.